

**PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE AMERICA LATINA
DENTRO DE LA CRISIS ACTUAL DEL CAPITALISMO MUNDIAL (*)**

Dr. Armando Córdova

I

1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El objeto de mi intervención en este evento es presentar una visión global de los aspectos más relevantes de la actual problemática latinoamericana y exponer mi punto de vista respecto a las posibilidades de superación de la misma en la década y media que nos separa del siglo próximo.

Esta conferencia –la primera de las dos que se asignaron– estará dirigida a la presentación de un diagnóstico sumario de la actual situación. En la próxima se discutirán las distintas alternativas propuestas para hacerle frente.

Comenzaré con una afirmación de carácter general que está fuera de toda discusión: tanto América Latina en su conjunto, como cada uno de sus países integrantes, atraviesa en la actualidad por la crisis económica de mayor profundidad que haya vivido la región durante el siglo XX. La gravedad de dicha situación se manifiesta en las siguientes evidencias.

(*) Conferencia dictada el 5-6-85 en el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, durante la sesión de apertura del ciclo de conferencias *América Latina hacia el siglo XXI*.

En primer lugar, en una baja sostenida de los indicadores del crecimiento económico. El producto interno bruto de la América Latina en su conjunto que había crecido en 1980 a una tasa de 5.6% cae a 1.7% en 1981, para decrecer en 1982 (-1.0%) y en 1983 (-1.7%). En 1984 se opera un ligero incremento de 2.6% que no logra, sin embargo, contrarrestar la estructural tendencia a la baja del PIB por habitante, pues de los veinte países de la región, diecisiete presentan una caída en dicho indicador que en algunos casos es de considerable magnitud. En efecto, entre 1981 y 1984, Bolivia presenta una baja acumulada de 24.0% ; El Salvador, 21.0% ; Uruguay y Venezuela, 16.0% ; Guatemala, 15.0% ; Costa Rica, 14.0% ; Argentina, 11.8% ; Brasil, 9.0% ; y México, 6.0%. Sólo tres economías latinoamericanas presentan algún tipo de crecimiento del PIB por habitante: República Dominicana (1.7%), Panamá (1.8%) y Cuba en un sólido 22.6% . Es importante aclarar que todas las cifras referidas provienen de la misma fuente, la CEPAL; aclaratoria necesaria para subrayar esta conclusión: sólo Cuba escapa al panorama general de deterioro profundo y sostenido del proceso de crecimiento económico y, por ende, de las condiciones generales de vida de la población.

En segundo lugar se observan, a lo largo de toda la región, elevadas cifras de desempleo urbano: Chile, 18.6% ; Uruguay, 15.6% ; Venezuela, 14.0% ; Colombia, 13.5% ; Brasil, 7.5% ; y México, 6.3% .

En tercer lugar hay que destacar una situación de inflación generalizada que a partir de 1983 comienza a alcanzar valores de tres dígitos para el conjunto de América Latina (132.1% en 1983, 186.3% en 1984 y 276.2% en 1985), destacándose situaciones de hiperinflación en Argentina y Bolivia y cifras considerablemente altas en Brasil, Perú, México y Uruguay. Aún países de inflación tradicionalmente moderada como Paraguay, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá y Venezuela presentan un evidente agravamiento de la situación.

En cuarto lugar un crónico deterioro de la balanza de pagos. Para 1982 la región presentó un déficit por tal concepto de 21.413 millones de dólares mientras que sólo tres países (Bolivia, Colombia y Nicaragua) presentaron pequeños saldos positivos (223 millones de dólares para el conjunto). La situación mejora para 1983 y 1984, pero sólo a costa de una drástica reducción de las importaciones en una tercera parte del valor de 1981.

En quinto lugar, de 1982 a 1984 el financiamiento neto disponible de la región se ha hecho negativo, lo que equivale a decir que las salidas hacia el exterior del ahorro interno generado en ella es mayor que los ingresos por el mismo concepto. En efecto, durante dichos tres años la América Latina hizo transferencias netas al exterior por un increíble total de 75.000 millones de dó-

lares. En otras palabras, estamos haciendo un voluminoso aporte de capital a los países desarrollados.

En sexto lugar, finalmente, una elevada carga por concepto de la deuda externa que agrava el cuadro depresivo general porque dificulta considerablemente las posibilidades de uso del ingreso derivado de nuestras exportaciones para financiar estrategias superadoras del mismo. Para 1984, la deuda externa latinoamericana alcanzó un valor global de 360.000 millones de dólares. Esto significa que sólo para pagar los correspondientes intereses hay que utilizar el 35% del valor de las exportaciones. Esta relación ilustra adecuadamente la creciente insistencia en la imposibilidad real de que dicha deuda pueda ser cancelada en un futuro previsible. Estamos en una situación muy similar a la que significativamente expresa el siguiente diálogo entre un alto funcionario polaco y un periodista occidental.

Periodista: -¿En qué términos piensan ustedes que podría ser cancelada la actual deuda externa de su país?

Funcionario: -Si duplicáramos nuestra producción y disminuyéramos a la mitad nuestro actual consumo y dedicáramos la totalidad del ahorro resultante al pago de la deuda externa, podríamos cancelarla en unos 74 años. Sólo que mucho antes todos habríamos muerto de hambre.

Periodista: -¿Significa eso que ustedes se niegan a pagar la deuda?

Funcionario: -De ninguna manera, señor, nuestro país está dispuesto a honrar sus compromisos. Estamos dispuestos a pagar lo que podamos. Digamos que algunos centavos por año.

Tal respuesta ilustra cabalmente la real perspectiva de la deuda externa latinoamericana. Si cada uno de nuestros gobiernos colocara en primer plano —como debería ser— el interés de sus gobernados, es decir, si se le diera carácter prioritario a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, habría que concluir en que ni siquiera Venezuela, que por su condición de país petrolero presenta mayores posibilidades que el resto de América Latina, podrá pagar en su totalidad la deuda contraída.

De todo lo anterior puede concluirse que el cuadro real de las expectativas de las economías latinoamericanas en lo que falta del siglo XX, es bastante sombrío. Y por si fuera poco, vivimos en la actualidad una situación de desconcierto teórico en el campo de la ciencia económica que contribuye poderosamente a consolidar la visión pesimista dominante respecto a las perspectivas del futuro previsible.

En efecto, vivimos hoy una situación opuesta a la de comienzos de la década de los sesenta, cuando la aceptación del paradigma teórico cepalista, reforzado por las ideas de Rostov, sirvieron

de base al optimismo casi generalizado sustentado en la idea de que a partir de la estrategia que combinaba la industrialización sustitutiva de importaciones con la promoción de “reformas institucionales” dirigidas a profundizar la homogeneización capitalista de nuestras economías, era posible generar una dinámica de crecimiento autosostenido capaz de permitir la progresiva superación del subdesarrollo.

La crisis actual no sólo ha desmentido la viabilidad de dichas expectativas, sino que de paso ha conducido a lo que parece ser el derrumbe total de la teoría económica que le servía de fundamento. A tal conclusión llegó precisamente el padre fundador de la misma, Raúl Prebisch, quien en su última obra, *El Capitalismo Periférico*, se encargó de hacer el responso final a su propio planteamiento teórico. Constata allí el distinguido economista argentino, que el tipo de crecimiento económico a que aquél conducía, era necesariamente *imitativo* tanto del patrón de consumo como de la tecnología de los países desarrollados; *excluyente*, porque sólo una fracción minoritaria de la población podía acceder a dicho patrón de consumo; y *conflictivo*, porque la exclusión de la gran mayoría de la población del reparto de los frutos del crecimiento económico producía, a la postre, un cúmulo de tensiones económicas y sociales que conducían necesariamente a la abolición de las libertades públicas como única manera de afrontar la protesta de la mayoría.

El fracaso del desarrollismo—reformista de la CEPAL ha dejado un vacío teórico en América Latina que intenta ser llenado no por quienes desde el campo marxista adversaron más abiertamente dichos planteamientos, sino por sus opositores de extrema derecha. Pero este fenómeno no sólo lo vive Latinoamérica. En las economías centrales, el fin de la viabilidad del paradigma keynesiano ha conducido a la crisis de la teoría económica académica incapaz de dar cuenta del conjunto de novedosos desarrollos que ha traído consigo el actual comportamiento crítico de la economía mundial.

Ante el fracaso de los viejos enfoques establecidos, la crisis teórica se extiende, pues, a ambos lados de la frontera centro—periferia. Dos corrientes intentan llenar ese vacío. Por un lado, la escuela marxista de la teoría de la regulación que está haciendo los más lúcidos aportes a la tarea de comprensión teórica de la actual situación mundial, aun cuando todavía con muy escasos aportes respecto a la situación del Tercer Mundo. Por el otro, el fantasma revivido del viejo liberalismo con el ropaje neopositivista de la escuela de Chicago, que rechaza *a priori* la necesidad de diferenciar entre capitalismo central y periférico, y nos invita a liberar, en todas partes, a las fuerzas del mercado como única vía “positiva” para superar la actual crisis del capitalismo. Ahora bien, superar la actual crisis no significa para dicha escuela lograr mejores condiciones de vida de la población, sino la reconstitución del poder del capital para incrementar *ad infinitum* su tasa de acumulación. Esta

posición deja a un lado por “irrelevante” el hecho concreto de que la superación de la crisis actual en esos términos propendería, en nuestros países, a generar el *crescendo* de los conflictos sociales que fue subrayado por Prebisch, como lo demuestran los resultados alcanzados por las políticas de los “*Chicago boys*” en Chile y en Argentina.

Estamos, en síntesis, frente a una grave crisis económica en América Latina que va acompañada de un serio y difundido desconcierto teórico que se traduce en la generalizada confusión respecto a las posibilidades para salir de la actual situación, al menos a partir de los enfoques teóricos establecidos. La única nota esperanzadora son los primeros atisbos de una nueva toma de conciencia que partiendo de las señaladas conclusiones de Prebisch, comienzan a abrirse camino hacia la búsqueda de nuevas estrategias transformadoras sobre la base de una re-definición del concepto mismo de desarrollo económico y de los objetivos que éste debe perseguir; redefinición que debe partir necesariamente, de un adecuado diagnóstico de la actual crisis latinoamericana.

Dicho diagnóstico debe arrancar, por supuesto, del estudio de los distintos casos nacionales, pero sólo será capaz de conducir a una cabal comprensión de cada uno de ellos y de la situación latinoamericana en su conjunto, si es capaz de penetrar en lo que de común y general tienen todos los casos nacionales. Lo que está ocurriendo en Venezuela puede servir para fundamentar esa afirmación.

Si observamos los análisis que se han hecho en el país para explicar la crisis venezolana constatamos que la casi totalidad de ellos, la considera un fenómeno que se explica a sí mismo; es decir, que ve sus causas en el estricto funcionamiento interno de nuestra economía y/o de la política económica seguida por los últimos gobiernos. Deja a un lado una realidad bien concreta: hoy están en crisis todos y cada uno de los países integrantes de la América Latina, más aún, el sistema capitalista mundial en su conjunto. Esto debe llevarnos, por lo menos, a complementar el análisis de las especificidades internas de cada situación nacional con las causas externas comunes a todas ellas, derivadas todas del hecho indiscutible de que dicho sistema mundial, como totalidad que nos contiene, atraviesa también por una profunda crisis económica de carácter estructural.

La aproximación metodológica que intenta estudiar cada crisis nacional partiendo únicamente de la consideración de factores internos y de sus especificidades, nos aleja irremisiblemente de la posibilidad de ir al conocimiento de la crisis latinoamericana; nos lleva, por el contrario, a la conclusión de Francois Niedergang cuando afirma que existen veinte américas latinas y, en consecuencia, veinte crisis diferentes. Aquí, lo particular aparece dominando a lo que es general y esencial a todos nuestros países.

La visión que sostengo es opuesta a la de Niedergang. Estimo que si bien es posible constatar la especificidad de cada situación nacional, ya que la crisis de la totalidad no se expresa de igual manera en todas ellas, existen suficientes elementos esenciales en todos los países como para fundamentar la idea de una crisis latinoamericana. Dicha idea se cimienta en dos tipos de observaciones; primero, la similitud esencial que señala el conjunto de indicadores ya referidos; segundo, en el estudio de la historia de la región, dentro de la cual es posible poner en evidencia una sucesión de modelos históricos de desarrollo periférico que se cumplen, *grosso modo*, en todos sus países. Me refiero al modelo colonial ibérico, al modelo primario exportador latifundista decimonónico, al modelo primario exportador basado en empresas extranjeras y al modelo de industrialización subordinada.

Es sabido que tal sucesión de formas de articulación centro-periferia explica en gran medida la secuencia histórica del proceso de conformación de las actuales sociedades latinoamericanas. Se sabe, de igual manera, que la marcha de dicho proceso no se produjo a la misma velocidad ni con la misma profundidad en todos los países de la región, debido a variadas causas de orden tanto interno como externo. Al respecto, pueden distinguirse tres grupos de países.

En el primero, que calificaré de *desarrollo capitalista periférico precario*, se incluyen todos aquellos países que todavía basan sus economías en las diferentes variantes de los modelos primario-exportadores, tales como Bolivia, Paraguay, Haití y Centroamérica con la excepción de Costa Rica y, por otras razones, Nicaragua.

En el segundo: *países de desarrollo capitalista periférico intermedio*, se ubican aquellos que han superado las primeras fases de la industrialización sustitutiva de importaciones (bienes finales y parte de los intermedios), tales como Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica y probablemente Ecuador y República Dominicana.

Finalmente, el grupo de los *países de desarrollo capitalista periférico avanzado*, integrado por Brasil, Argentina y México, los cuales han llegado a un mayor desarrollo de la industria pesada que les ha permitido avanzar hacia la producción de bienes de capital. Presentan, además, un mercado interno relativamente amplio y una mayor penetración del capitalismo en la agricultura.

Hablando en términos de esa tipología, la crisis presenta modalidades diferentes en cada grupo de países. En los primeros, se expresa de manera dominante en la imposibilidad del sector externo para expandir sus exportaciones debido a la contracción de la demanda mundial de materias primas que por razones de diversa índole ha generado la crisis económica internacional. En los segundos, por una combinación de dicho efecto con el agotamiento prematuro del mercado interior para la industria productora de bienes finales y la puesta en evidencia de crecientes dificultades para avanzar hacia etapas superiores de la sustitución de importaciones. En los del tercer

grupo, la crisis plantea, además de algunos de los citados problemas, serias dificultades para crecer hacia afuera después de haber cubierto en lo esencial la demanda interior de bienes industriales, sustentada en la concentrada distribución del ingreso que es característica común del capitalismo periférico.

Habría todavía que incluir otras variables en la clasificación de los países de la región. Me refiero, en primer lugar, al carácter petrolero o no de cada economía nacional, debido a las obvias ventajas de que han gozado hasta ahora aquellos países con sectores externos basados en la exportación de hidrocarburos, para financiar su crecimiento económico, aun cuando no está demás señalar que tales ventajas han entrado en una fase de progresivo deterioro a medida que se reestructura la demanda mundial de materias primas energéticas dentro del conjunto de transformaciones estructurales a que ha dado lugar la actual crisis económica internacional. En segundo lugar, el grado de autonomía alimentaria de cada país es también un factor que va a incidir sobre la forma como se presenta la crisis en cada caso nacional. Un tercer factor es la cuantía absoluta de la deuda externa y su relación con el monto de las exportaciones. Finalmente, hay que hacer referencia a otras variables extraeconómicas como el grado de estabilidad social y política.

La operación diferenciada de cada una de esas variables en las distintas situaciones nacionales da lugar a las particularidades de cada una de ellas; mientras que lo común al conjunto de países latinoamericanos es que sus respectivas crisis no son sino expresiones particularizadas de la crisis global que padece el sistema capitalista mundial que los engloba, con excepción de Cuba (dejando a un lado, por ahora, la situación de Nicaragua porque la gran potencia norteamericana no ha renunciado aún a mantenerla dentro del sistema capitalista mundial).

Otro aspecto que conviene relevar es que la crisis capitalista mundial no comienza en América Latina, sino en los países capitalistas centrales y, particularmente, en los Estados Unidos, donde aparece desde fines de la década del sesenta. La crisis nuestra es, pues, *una crisis capitalista periférica*, derivada de la dinámica global del sistema. Es allí donde radica el carácter unitario de la actual situación latinoamericana. De modo que una cabal comprensión de la misma debe partir de una comprensión también cabal de la relación centro-periferia y de la naturaleza de la crisis que hoy sacude a la totalidad capitalista mundial.

Una de las características inmanentes al comportamiento histórico de la economía capitalista es el crecimiento cíclico que da lugar a situaciones de crisis económicas cada cierto tiempo. Debemos distinguir aquí entre pequeñas y grandes crisis. Las primeras, conocidas también como *recesiones*, han sido entramamientos pasajeros del crecimiento económico sucedidos cada diez o doce años y resueltos, por lo general, con manipulaciones de carácter fiscal o monetario orienta-

das a elevar la demanda agregada o algunos de sus componentes. Las segundas, grandes crisis o *grandes depresiones*, han ocurrido con intervalos de varias décadas como resultado del agotamiento de las condiciones para prolongar el crecimiento económico dentro del cuadro socio-económico y tecnológico e institucional vigente en cada período histórico como sustento de la continuidad del proceso de acumulación capitalista. Se denomina, precisamente, *régimen de acumulación de capital* a ese conjunto de condiciones particulares de cada determinada fase histórica.

Desde fines del siglo XVIII hasta el presente, se conocen tres grandes períodos en los que rigieron diferentes regímenes de acumulación, cada uno de los cuales con su fase de génesis o emergencia, auge, estancamiento y crisis final. El primero fue el régimen de la primera revolución industrial (1770—1870); el segundo, el de la segunda revolución industrial (1870—1945); y el tercero; se inicia en 1945 y hoy vive su fase de crisis final.

Vistas en ese contexto histórico, las grandes crisis aparecen en las fases de transición de un régimen de acumulación a otro, en las cuales se crean las condiciones para la emergencia de profundos cambios estructurales (socioeconómicos, técnicoeconómicos e institucionales) necesarios para superar las viejas estructuras inoperantes en términos de la continuidad del crecimiento capitalista y promover el nacimiento de una nueva organización estructural e institucional.

La crisis capitalista mundial actual es una gran depresión. Señala el agotamiento de los sectores que desde 1945 hasta ahora, liderarizaron el crecimiento económico. Estos sectores son la industria automovilística, la de electrodomésticos, la aeronáutica, la industria petrolera, la siderurgia, etc. Señala también el agotamiento del tipo de organización tecnológica basada en la cadena de montaje automático (fordismo); de la producción dirigida hacia el consumo de masas; del keynesianismo como fundamentación de las políticas económicas orientadas a la regulación del crecimiento económico. Señala, finalmente, y esto es bastante importante para lo que hoy discutimos, la inviabilidad del tipo de división internacional del trabajo que ha privado hasta ahora dentro del orden económico capitalista y, en consecuencia, la creciente inoperatividad del correspondiente sistema de relaciones centro-periferia. Aspecto este que subraya la íntima relación de correspondencia entre las crisis latinoamericana y la de los países centrales, relación que puede constatare con toda claridad, de modo muy similar, en todas las grandes crisis anteriores.

En efecto, la crisis del sistema colonial ibérico en América coincide con la emergencia del régimen de acumulación de la primera revolución industrial y se resolvió mediante un nuevo tipo de articulación de nuestros países al sistema capitalista mundial después de la independencia, cuando Inglaterra emergió como centro dirigente del mismo, y como tal, hizo todo lo que pudo para organizar una nueva división internacional del trabajo que correspondía a sus intereses de desarrollo. Fue dentro de ese nuevo orden económico internacional que se configuró el modelo

de subdesarrollo latinoamericano centrado en la exportación de productos primarios a partir de unidades productivas basadas en el binomio latifundio-minifundio.

Más adelante, como secuela de la crisis de dicho régimen de acumulación a escala mundial, se produce la llamada segunda revolución industrial, que verá emerger las profundas transformaciones estructurales del capitalismo monopolista que darían lugar a una nueva división internacional del trabajo dentro de la cual surgiría Estados Unidos como gran potencia dirigente del crecimiento económico mundial y beneficiaria central de las nuevas formas de relación centro-periferia, basadas en el modelo de subdesarrollo primario exportador-monopolista, que condujo a la penetración, en nuestros países, de empresas enclaves extranjeras, líderes del sector exportador. Fue obvio, aquí también, el papel organizador que jugó dicho país en el nuevo esquema de la relación centro-periferia.

Si para garantizar su posición dominante, Inglaterra firmó con casi todas las nuevas naciones latinoamericanas Tratados de Amistad, Comercio y Navegación que daban a ese país ventajas competitivas de importancia en los mercados de la región, Estados Unidos, en su tiempo, hizo lo mismo con la firma de los Tratados de Reciprocidad Comercial con nuestros países, dirigidos a impedir en ellos el desarrollo industrial, institucionalizando de tal modo un tipo de división internacional del trabajo que nos especializaba en la exportación de bienes primarios producidos por empresas capitalistas centrales y garantizaba los mercados latinoamericanos para la producción industrial de la gran potencia del norte.

Finalmente, la crisis de los años treinta de este siglo y su consecuencia inmediata, la segunda guerra mundial, condujeron a la emergencia de un nuevo régimen de acumulación en la postguerra que se tradujo, a la postre, en una nueva división internacional del trabajo dentro de la cual ocupó un lugar importante en América Latina el desarrollo de formas de industrialización subordinadas, apendiculares a los centros, orientadas hacia la sustitución de importaciones en los países de desarrollo periférico más avanzados de la región. Es éste el Modelo de subdesarrollo que hoy está en crisis dentro de la crisis global del sistema mundial del capitalismo. De allí que, al igual que en las otras situaciones pasadas similares, esté en marcha un conjunto de procesos —algunos objetivos, otros voluntaristas— orientados hacia la superación de la actual situación mediante la emergencia de un nuevo régimen de acumulación global que le reserva nuevos roles a los países periféricos. En otras palabras, se están produciendo las condiciones para el surgimiento de un nuevo orden económico internacional que traiga consigo nuevas formas de subordinación centro-periferia. Veamos cuáles son esos procesos.

En cuanto a los de carácter objetivo —es decir, aquellos independientes de la voluntad de los hombres— destaca la emergencia de nuevos sectores económicos de punta basados en una profun-

da revolución tecnológica. Me refiero a la electrónica, la informática, la robótica, la nueva biología, a los elementos de un nuevo sistema energético, conquista del espacio, etc. Coincidiendo con tales desarrollos, en los países centrales se produce el desplazamiento de las industrias agotadas hacia las naciones del Tercer Mundo, específicamente, hacia aquellas naciones donde se presentan las mejores condiciones para su recepción: mano de obra o energía baratas, dotación de recursos naturales, adecuada localización geográfica, aceptación pasiva de la contaminación ambiental que provocan algunas de esas industrias, etc. Es el llamado redespliegue industrial. Ambos procesos nos dan la pauta de una división internacional del trabajo que está todavía en su etapa infantil. Simultáneamente, se operan en los centros capitalistas presiones orientadas a fortalecer la posición de fuerza del capital sobre el trabajo aprovechando la menguada capacidad de respuesta de los trabajadores debido a la elevada tasa de desocupación que ha traído la crisis.

Otro importante proceso objetivo en marcha es la progresiva descomposición del aparato de legitimación del régimen mundial de acumulación en crisis; situación que se observa también en todas las grandes depresiones anteriores. Aclaro. En cada uno de los referidos períodos históricos ha existido un contexto de ideas económicas, sociales y políticas dominantes, así como un orden institucional aceptado y un aparato represivo, organizados todos por y alrededor de la gran potencia de la época, dirigidos a institucionalizar el régimen de acumulación en curso y a afrontar las fuerzas sociales adversas a él, ya en el campo ideológico, o en el abiertamente político y militar. Cada gran depresión conduce a la inoperatividad y descomposición de dicho aparato de legitimación mientras se organiza el nuevo régimen de acumulación que traerá consigo también nuevas modalidades de legitimación.

Se vive hoy una situación de marcado deterioro de la hegemonía norteamericana en el orden internacional que se inicia en 1968 cuando coinciden dos fenómenos claves en el desencadenamiento de la grave situación que dura hasta el presente: la crisis monetaria internacional y el derrumbe del sistema de Bretton Woods, por una parte; y la ofensiva del Tet en Vietnam que condujo a la derrota final de la intervención militar de los Estados Unidos en ese país, por la otra. Comienza, a partir de entonces, un progresivo deterioro de la capacidad de la gran potencia del sistema capitalista mundial para imponer sus designios en el orden internacional que tiene como evidencias más recientes las humillaciones norteamericanas en Irán y en Líbano y las crecientes dificultades para imponer su política en Centroamérica.

Lo dicho hasta aquí pone en clara evidencia el alto grado de complejidad de la actual situación interna del capitalismo mundial, complejidad que deriva de tener que afrontar, como en toda gran depresión, una crisis que desborda el mero orden económico, porque es también política y

teórica; a lo cual hay todavía que agregar, en el orden externo, un factor novedoso en la historia del sistema que complica poderosamente el cuadro crítico general: la presencia de un sistema mundial antagónico, el socialista, que no sólo se presenta como una alternativa al orden capitalista, sino que detenta un poderío militar de tal magnitud que ha generado una virtual situación de equilibrio en la balanza del poder mundial.

La reacción de los grandes poderes del capitalismo frente a tan difícil coyuntura histórica puede sintetizarse así:

Por un lado favorecen el desarrollo de los ya referidos procesos objetivos (profundización del desarrollo de los sectores punta y del coetáneo redespigüe industrial) y, por el otro, mediante la puesta en marcha de políticas voluntaristas dirigidas a ir conformando la nueva división internacional del trabajo que corresponderá al emergente régimen de acumulación.

Al respecto, destacan las políticas coordinadas del gran capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos, encaminadas —a partir del ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de ese país— a la búsqueda simultánea de la superación de la crisis internacional y a la reconquista de la plena hegemonía norteamericana. De ello dan fe, el alza de las tasas de interés de ese país para atraer la mayor cantidad de capital foráneo que financie la reestructuración de su economía, la promoción del neoliberalismo positivista de la escuela de Chicago para minar la capacidad de decisión de los Estados nacionales en el orden económico y disminuir la capacidad de oposición de los trabajadores ante el poder del capital, ya bastante golpeados por las elevadas tasas de desempleo que ha traído la crisis y, finalmente, la agresiva política internacional de la administración Reagan que persigue alcanzar objetivos estratégicos muy precisos. En cuanto a los demás países desarrollados (Europa Occidental y Japón) obligarlos a aceptar como necesidad prioritaria la superación de la crisis norteamericana, utilizando como instrumento político central el chantaje nuclear contra el campo socialista que exacerba las contradicciones entre los dos sistemas mundiales y obliga a los aliados industrializados de Estados Unidos a tener que pagarle, en términos de sumisión a sus designios, la protección que les brinda el poder militar de ese país.

En cuanto a la América Latina los objetivos de la política Reagan son también bastante claros. En primer lugar, restablecer en la región el tipo de hegemonía norteamericana basado en la doctrina de Monroe (“América para los americanos”). De allí, el retorno al bilateralismo (dividir para reinar) que es uno de los pilares de la política exterior de Reagan y que se expresa con toda claridad en su intransigente oposición a la discusión global de los problemas de la deuda externa latinoamericana. Alcanzar este objetivo es una tarea crucial para los Estados Unidos como punto de partida para afianzar la credibilidad de sus aliados europeos y asiáticos en la capacidad del país del norte para imponer su condición de potencia central del sistema.

El segundo objetivo y el de mayor importancia estratégica es lograr la aceptación, voluntaria o no, por parte de nuestros países, de la nueva división del trabajo en ciernes y de los roles que en ella le corresponde jugar a cada uno.

En cuanto a los instrumentos para el logro de dichos objetivos en nuestro subcontinente, documentos de la administración de Reagan distinguen entre dos grupos de países de interés prioritario hacia los cuales se aplican planteamientos tácticos diferentes. El primero corresponde a Centroamérica y el Caribe, donde los Estados Unidos están dispuestos a recurrir al uso de la fuerza militar como lo demostraron en Grenada y actualmente amenazan a Nicaragua. El segundo grupo de países son los grandes países de América Latina (Brasil, Argentina, México y para algunos, Venezuela), donde el instrumento clave es el uso del chantaje de la deuda externa para —con el apoyo del Fondo Monetario Internacional— entorpecer cualquier otro tipo de crecimiento económico futuro que no sea el que corresponde a los intereses de consolidación del rol hegemónico de la economía norteamericana en el sistema capitalista mundial.

Al mismo tiempo que se operan tales presiones de carácter económico, político y aún militar, se abre paso en el mundo el esquema ideológico legitimador del nuevo orden imperial basado en el neomaquillado liberalismo de la escuela de Chicago, que aparece como fundamento teórico del capitalismo salvaje que intentan reconstituir los grandes poderes del capitalismo mundial. Se nos intenta conducir así a nuevas formas de la relación centro-periferia tratando de reducir a sus niveles mínimos nuestra capacidad de decisión autónoma. No habría, si se aceptan pasivamente tales presiones, otras salidas para la crisis económica en los países latinoamericanos que la espera resignada a que la emergencia de un nuevo régimen de acumulación a escala mundial nos integre a nuevas modalidades de desarrollo dependiente.

Tales son las aspiraciones de los sectores dominantes que fuera y dentro de nuestros países identifican sus intereses con los de la administración de Reagan. Falta ahora por ver si estamos condenados a la fatalidad de esos resultados. Un primer aspecto, que sólo puedo tratar hoy muy brevemente, es el de la real viabilidad de la actual política internacional de los Estados Unidos. Surgen allí serias dudas a partir de la creciente disminución relativa de las tasas de incremento de la productividad de ese país; de la terciarización también creciente de su economía; del gigantesco déficit fiscal; de la desmesurada magnitud de su deuda externa e interna, etc., procesos todos que ponen en entredicho la real capacidad de la gran potencia norteamericana para alcanzar los objetivos que persigue su política de reconquista de su hegemonía mundial. Volveré sobre el tema en la próxima conferencia.

Un segundo aspecto es el que se refiere a la reacción de nuestros países frente al programado incremento de la subordinación económica, social y política a los designios centrales. Al respecto,

podemos plantear la siguiente interrogante: ¿Hay que dar por descontada su pasiva aceptación, o es posible oponerle nuevas estrategias nacionales de desarrollo autónomo que coloquen en primer plano los intereses de nuestros pueblos por encima del interés de la continuidad histórica de la acumulación capitalista concentrada en los centros dominantes del sistema?

A la discusión de este último aspecto estará dedicada mi próxima intervención en este ciclo de conferencias.

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE AMERICA LATINA DENTRO DE LA CRISIS ACTUAL DEL CAPITALISMO MUNDIAL (*)

II

LAS PERSPECTIVAS DE AMERICA LATINA CON PARTICULAR REFERENCIA AL CASO VENEZUELA

En la conferencia precedente hice —combinando dos tipos de análisis— la caracterización de la crisis que viven actualmente los distintos países de América Latina. Uno de estos análisis partía de la consideración de cada situación nacional, colocando en primer plano las especificidades de la misma; y el otro, arrancaba de una visión más global y totalizante, en donde cada caso nacional aparecía como la forma particular que allí asumía la crisis general que hoy sacude al Sistema Capitalista Mundial (SCM). Concluimos señalando que sólo una síntesis de ambas visiones, capaz de establecer las relaciones entre la dinámica estructural del todo (SCM) y la de sus partes (países que lo integran), podía conducirnos a una comprensión integral de esas dos instancias de la crisis.

De acuerdo con dicha concepción teórica y metodológica, mientras permanezcamos dentro del SCM las posibilidades de superación de cada crisis nacional estarán íntimamente ligadas a la superación de la crisis mundial. Caracterizada esta última como una gran depresión, puesto que expresa el agotamiento definitivo del régimen de acumulación de capital que motorizó el crecimiento económico a partir de 1945. Ese agotamiento plantea como condición necesaria para la

(*) Segunda conferencia dictada dentro del ciclo *América Latina hacia el Siglo XXI*. Organizado por el CEELA.

continuidad del orden capitalista, la sustitución del régimen de acumulación por uno nuevo. Esto es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en los últimos quince años.

Vamos a discutir ahora las distintas estrategias que se están proponiendo o instrumentando en América Latina para hacer frente a la crisis y la forma como cada una de esas propuestas intenta articularse con ese proceso de reestructuración de la economía internacional que intentan reforzar las políticas de los grandes poderes mundiales con la finalidad de orientar nuestro destino en el sentido que corresponde a sus intereses.

Distinguiré dos grupos de estrategias las cuales denominaré *estrategias pasivas y estrategias transformadoras o alternativas*. Las *pasivas* son todas aquellas propuestas que partiendo de considerar al capitalismo como la única forma “racional” de organizar el proceso productivo, aceptan acríticamente nuestra condición periférica como un simple estado de “menor desarrollo” que, en el mejor de los casos, sólo podría ser superado en forma gradual dentro del cuadro de condiciones que privan en el orden capitalista internacional, al cual nos hallaríamos integrados en forma irreversible.

Dentro de tal concepción teórica e ideológica, las estrategias nacionales para hacer frente a la crisis apuntan hacia formas de crecimiento que reproducen y profundizan los elementos esenciales del modo de producción capitalista en el interior de las economías latinoamericanas, reforzando así nuestra obligada articulación al sistema mundial. Pueden distinguirse dos modalidades de dicho planteamiento.

La primera, que denominaré *estrategia de reactivación*, está dirigida en el orden interno de cada país, a poner en marcha, mediante la acción estatal, un conjunto de reajustes monetarios y/o fiscales, y/o de regulación económica, dirigidos a “reactivar” el aparato productivo sin transformaciones estructurales; es decir, conservando el mismo estilo de crecimiento económico que desembocó en crisis —al cual se le considera transitoriamente entrabado, mas no agotado—, pero con la esperanza de que una “recuperación” de la economía mundial favorecerá el retorno a la normalidad desarrollista basada en la expansión de las exportaciones y la profundización de la sustitución de importaciones. Es el planteamiento que sostienen quienes consideran a la actual situación como un fenómeno de carácter coyuntural; interpretación que ha venido siendo desmentida por el progresivo agravamiento de la misma, tanto en el orden mundial como en los distintos casos nacionales.

La segunda modalidad de estas estrategias la denominaré de *reestructuración subordinada*, mucho más realista que la de *reactivación* puesto que acepta explícita o implícitamente la imposibilidad de un retorno a la situación anterior a la crisis debido a las transformaciones estructurales, transformaciones de fondo, que se están produciendo día a día en la economía capitalista mun-

dial. Sobre la base de esta constatación se propone que nuestras economías realicen los necesarios reajustes internos para controlar los efectos de la crisis e irse adaptando progresivamente a las condiciones de comercio que promueve el régimen de acumulación emergente en el orden internacional y su correspondiente división internacional del trabajo y de la producción. Pueden distinguirse aquí dos variantes de política económica que pretenden conducir al mismo fin. La nekeynesiana que combina reajustes fiscales, monetarios y de regulación económica y la neoliberal que plantea limitar la acción estatal a la estricta regulación monetaria y dejar todo lo demás al libre juego de la oferta y la demanda; tal como proponen en Venezuela, FEDECAMARAS y sus aliados neopositivistas, quienes concentran sus esfuerzos en lograr la “reposición de las garantías económicas constitucionales”, eufemismo para referirse a que el gran capital privado (nacional o transnacional), centralizado en un pequeño grupo de monopolios y oligopolios, tenga absoluta libertad para dirigir la economía nacional, con el argumento de que sólo garantizando plena libertad de acción a las “fuerzas del mercado” se logrará superar la crisis económica nacional.

Entre las *estrategias de reestructuración subordinada* destaca con plena nitidez la que, en forma por demás pragmática, está promoviendo e instrumentando en América Latina el Fondo Monetario Internacional apoyándose en el considerable poder para participar en el diseño de nuestras políticas económicas que le asigna su doble papel de comisario de la banca financiera internacional y caballo de troya de la política de la administración de Reagan.

Dicha estrategia intenta orientar las economías de la región hacia dos objetivos específicos. El primero, de carácter táctico, garantizar —sin mayor consideración de los efectos internos— niveles máximos en los pagos para amortizar la deuda externa. El segundo, de orden estratégico, limitar la autonomía de decisión de cada país en lo que atañe a su forma de inserción en el comercio internacional, con la finalidad de favorecer una fluida articulación de América Latina en el nuevo orden internacional, hecho éste promovido por las políticas de los grandes poderes del capitalismo mundial.

Tanto las *estrategias de reactivación* como las de *reestructuración subordinada* plantean como supuesto fundamental, fuera de toda discusión, la absoluta certeza de una total y pronta recuperación de la economía mundial. Como argumento fundamental de dicho supuesto se invoca la reconocida capacidad del orden capitalista para resolver y superar otras situaciones similares en el pasado, (grandes depresiones) mediante los avances de carácter tecnológico y la promoción de transformaciones relevantes en la organización del proceso productivo, particularmente en las formas de relación salarial. Se citan, por ejemplo, la superación de la crisis de los '70 del siglo XIX por medio de la sustitución del esquema industrial atomístico de la llamada competencia perfecta, con el surgimiento y desarrollo de los grandes monopolios y la progresiva instauración del taylor-

ismo; así como la salida de la gran depresión 1929-1945, a través de la emergencia de las grandes corporaciones transnacionales conglomeradas, la profundización de la internacionalización del ciclo completo del capital, el advenimiento del fordismo como forma de regulación de la relación salarial y de adecuar los patrones productivos con los de consumo y, finalmente, la imposición del keynesianismo como forma de regulación estatal del equilibrio oferta-demanda.

No es posible negar que así ha sido hasta ahora. Está fuera de toda duda que hasta el presente, el capitalismo ha demostrado una gran capacidad de autotransformación, una gran capacidad para resolver sus más difíciles coyunturas históricas. De ahí que no se ponga en tela de juicio que la actual también pueda ser resuelta. A ello apuntan, precisamente, tanto los procesos objetivos que marchan en el sentido de una nueva revolución tecnológica y de superación del fordismo por nuevas formas de organización socioeconómicas, como las políticas voluntaristas de Reagan y las grandes corporaciones a las cuales se hizo referencia.

Sin embargo, la situación actual presenta, por lo menos, una importante diferencia con las grandes depresiones del pasado. Por primera vez en la historia, el capitalismo no está solo sobre el planeta. Quiera aceptarse o no, existe otro sistema mundial antagónico; otro sistema en abierta contradicción con él que lo obliga a considerar las acciones dirigidas a resolver sus problemas internos dentro del marco general del enfrentamiento con el Sistema Socialista, lo cual restringe obviamente su libertad de acción.

Como corolario de esa diferencia crucial con el pasado, desaparece del cuadro de posibilidades de acción un recurso que jugó importancia decisiva en la superación de las anteriores depresiones: las guerras entre países capitalistas que permitieron, tanto en el interior de los países comprometidos, como en el orden internacional, crear las condiciones más favorables para permitir la transición del régimen de acumulación en crisis al que habría de sucederlo.

En efecto, sabemos que toda gran crisis económica es también una crisis política y social que se expresa, en el interior de cada país, como agudización de las contradicciones entre capitalistas y trabajadores, y en el plano internacional como exarcebación de los enfrentamientos entre las grandes potencias capitalistas, cada cual empeñada en tratar de superar su propia crisis aun a costa de las demás. Dentro de ese cuadro de problemas las guerras han cumplido históricamente una finalidad. En primer lugar, sublimar y minimizar los conflictos sociales internos colocándolos en un segundo plano respecto a los sentimientos nacionalistas y patrióticos. En segundo lugar, toda gran depresión exige una reestructuración, más o menos radical de la economía mundial, que trae consigo cambios en el orden jerárquico de las grandes potencias centrales dentro del sistema. Los enfrentamientos bélicos entre ellas han sido, hasta ahora, la forma más expedita para dilucidar dicha cuestión. En tercer lugar, las guerras favorecen y aceleran el proceso de sustitución de la vieja

organización tecnológica del modelo de acumulación agotado por la que va a servir de basamento al régimen de acumulación emergente. En efecto, por un lado se acentúa la destrucción y depreciación del viejo capital fijo, mientras que, por el otro, se desarrolla considerablemente la investigación científica y tecnológica financiada por el Estado, así como la aplicación de innovaciones que van a jugar un rol de importancia en la transformación de la estructura productiva una vez terminado el conflicto bélico.

La presencia del campo socialista parece haber eliminado la posibilidad de tales guerras entre grandes potencias capitalistas. Por su parte, la eventualidad de un enfrentamiento bélico directo entre los dos grandes sistemas mundiales, más que augurar el fin de la crisis, pone en peligro la propia existencia del género humano. En tales circunstancias no me atrevería a afirmar que, a la postre, el capitalismo no pueda superar su crisis actual sin el recurso a las grandes guerras. Quizás le basten las pequeñas que ahora mantiene y promueve. Lo que sí afirmo es que la renuncia a tal recurso constituye una importante limitación respecto a las similares situaciones críticas del pasado.

Asigno particular importancia a tal respecto al notorio problema de la necesaria reestructuración del orden jerárquico internacional que hoy está planteado dentro del sistema capitalista: Hasta ahora los Estados Unidos han tenido éxito en colocar en segundo plano su decreciente poder económico relativo frente a sus aliados, en virtud de su indiscutible superioridad militar como garante del equilibrio en la balanza de poder entre los dos sistemas en pugna. Pero la pregunta clave es hasta cuándo puede mantenerse la evidente desproporción entre la enorme capacidad política y militar de Estados Unidos y el debilitamiento de las bases económicas que la sustentan. Esta pregunta está suscitando hoy en día las más preocupadas respuestas acerca del futuro de dicho país como potencia hegemónica del capitalismo y sobre la viabilidad misma de la estrategia de la administración Reagan para superar la crisis mundial asignando prioridad a la economía norteamericana.

En un artículo publicado en *Le Monde* en febrero de este año (1985), el conocido economista estadounidense Walter W. Rostov plantea como problema fundamental de su país el de que, al estar gastando mucho más de lo que produce ha caído en una situación de endeudamiento crónico de todos los sectores de la economía. Los consumidores hacen uso del crédito para consumir más de lo que ganan, comprometiendo sus ingresos futuros. Las empresas, a su vez, tienen enormes deudas con el sistema financiero. El gobierno con el resto del mundo y con las empresas proveedoras internas, tanto que hoy ese país mantiene un colosal déficit fiscal. ¿Hasta cuándo —se pregunta Rostow— puede durar esa situación sin producir una catástrofe?

Un articulista del mismo periódico francés subrayaba al respecto que el problema fundamental de la estabilidad del sistema financiero capitalista no es la enorme deuda, prácticamente impa-

gable en las condiciones actuales, del Tercer Mundo, sino la que ha contraído Estados Unidos que, en términos globales —es decir, incluyendo a los consumidores, las empresas y el gobierno— es trece veces mayor que aquella. Por su parte, André Gunder Frank considera el problema de la deuda global del mundo capitalista con su sistema financiero como una bomba de tanto poder explosivo y destructor como la atómica, y a la deuda interna y externa de Estados Unidos como su principal detonante. Finalmente, hay que hacer referencia a la conclusión de algunos analistas de la crisis —Giovanni Arrighi y el mismo Frank—, quienes aseguran que no será posible una plena superación de la crisis económica internacional sin un *crack*, como el ocurrido en 1929.

Aun cuando sería arriesgado extraer conclusiones definitivas partiendo de esas observaciones, considero que, por lo menos, ellas dejan ver que las posibilidades de superar la crisis a través de un tránsito sin traumas desde el modelo de acumulación agotado hacia el que está en proceso de conformación, no son tan idílicas como lo pretende el supuesto básico de las estrategias pasivas. Todavía más. Aún aceptando que todo marchara según las más optimistas expectativas habría que considerar la variable tiempo. ¿Dentro de cuántos años se producirá la recuperación de la economía mundial sobre las nuevas bases? Objetivamente hablando, cualquier respuesta a esta pregunta en el momento actual no sería más que una conjetura; pero si tomamos en cuenta el análisis de las anteriores experiencias históricas podrá constatarse que a pesar de los efectos de las guerras intercapitalistas como factor acelerador de la superación de las grandes depresiones del pasado, dicho proceso fue siempre largo y penoso. Entonces, no hay razones para pensar que la actual sea una excepción. Todo lo contrario. Parece existir un difundido acuerdo entre los más lúcidos analistas económicos en asignarle una duración no menor de diez años y muy probablemente, mucho más de lo que falta del siglo XX.

Dentro de tales previsiones, las alternativas pasivas, aparte de mantener las bases estructurales en que se sustenta la desigualdad económica, social y política que caracterizan al capitalismo periférico de nuestros países, implican prolongar por un largo plazo la actual situación de deterioro de la actividad económica, agravamiento de las condiciones generales de vida de la población y, por ende, emergencia de crecientes dificultades para la profundización del sistema democrático, con la manifiesta posibilidad de agudización de los conflictos sociales subyacentes, como ya comienza a hacerse evidente en Brasil con las huelgas y asaltos a supermercados; en México con manifestaciones de mineros desnudos y protestas generalizadas que abarcan hasta los empleados del sector público; además de las diversas formas de acciones subversivas en otros lugares de América Latina y el considerable auge de la delincuencia organizada y espontánea, que parece ser uno de los fenómenos más difundidos en la actualidad latinoamericana.

Hasta ahora, he limitado el análisis crítico de las estrategias pasivas a la consideración de su viabilidad y de las implicaciones conflictivas que produciría la larga espera de la recuperación de la economía capitalista mundial como condición necesaria para la superación de la crisis de nuestros países, ya por la ilusoria vía de la reactivación, o de la reestructuración de sus economías en concordancia con las exigencias del nuevo orden mundial que sus proponentes avisan. Pero hay que hacer una observación más de fondo respecto a las expectativas de dichas estrategias. Me refiero al tipo de superación de la crisis que a través de ellas se espera alcanzar, lo cual implica una aceptación acrítica y resignada de los roles que nos asigne dentro del sistema capitalista el nuevo modelo de acumulación que se impulsa desde los países centrales. Además está decir, que tales roles, si se acepta también aquí la experiencia histórica, conducen a nuevas formas de capitalismo subordinado y periférico para nuestros países que amenazan con ampliar aún más la brecha que nos separa del mundo capitalista desarrollado. En otras palabras, que las estrategias pasivas consideren como una fatalidad insuperable nuestra condición de sociedades capitalistas de tercer orden, apendiculares y dependientes.

Aduje la experiencia histórica como aval de esta última afirmación porque es fácilmente constatable que después de cada una de las grandes depresiones del pasado sucedió precisamente lo mismo; es decir, cada uno de nuestros países se insertó de manera pasiva en el respectivo régimen de acumulación emergente; fuimos inducidos, ya por los mecanismos del mercado o por presiones voluntaristas de los poderes centrales y sus aliados internos a producir lo que el sistema mundial requería de nosotros y a tener que comprar lo que sus países desarrollados necesitaban vendernos.

Ilustraré esa afirmación con una breve referencia al caso venezolano, bastante elocuente por cierto. Durante el período colonial nos convertimos en país productor y exportador de cacao, no por decisión autónoma y ni siquiera por imposición de la corona española, sino porque desde Curazao y Aruba el capital holandés incitó en tal sentido a los terratenientes criollos. Más tarde, después de la Independencia, pasamos a ser productores de café —un producto de origen no americano— porque esa fue la posibilidad más redituable que nos asignó entonces el mercado mundial. De igual modo, nos convertimos en sociedad petrolera, no porque así lo decidiéramos, sino porque coincidió el cambio de base del sistema energético del capitalismo mundial, del carbón a los hidrocarburos, con el hecho de que Venezuela disponía de importantes yacimientos de éstos últimos, para cuya ubicación y explotación fue necesario otorgar concesiones al capital extranjero.

Tendríamos ahora que esperar pasivamente hasta que la dinámica del sistema decida cuál será el tipo de especialización que debemos aceptar en la nueva etapa de la historia del capitalismo que se estaría iniciando con la crisis actual. La consecuencia más relevante de tal expectativa

sería un cambio de forma, mas no de esencia, de nuestro modo de articulación a la economía capitalista mundial; es decir, la reestructuración de nuestra condición periférica en función del interés prioritario de los sectores dominantes del capitalismo que es el de fortalecer la continuidad histórica de la acumulación del capital que constituye la fuente nutricia de sus posiciones de poder.

Aceptar la fatalidad de ese destino —criterio que es esencial a las estrategias pasivas— implica, no sólo renunciar a la posibilidad de lograr formas más autónomas de desarrollo, sino renunciar también a que las grandes mayorías latinoamericanas puedan superar a plenitud los niveles económicos, sociales y políticos que han sido, hasta ahora, condición necesaria para la viabilidad del capitalismo periférico. Implica, en síntesis, renunciar al ideal de una sociedad democrática y participativa, puesto que la democracia económica es el sostén fundamental de la democracia social y política.

En oposición a ese punto de vista que considera al capitalismo subdesarrollado como un mal inevitable —y aun necesario—, se han venido haciendo, dentro y fuera de América Latina, un conjunto de planteamientos críticos sobre el orden vigente que han dado lugar a nuevas propuestas alternativas de desarrollo dirigidas a corregir las deficiencias y aberraciones del actual orden de cosas. Dichos planteamientos críticos son, principalmente, los siguientes:

1.—Rechazo a la idea central del desarrollismo que privilegia la intensidad del crecimiento del PTB por habitante sobre todo el conjunto de otros aspectos económicos, políticos y sociales que responden de manera más integral al interés de la sociedad en su conjunto, tales como la distribución del ingreso, la autonomía nacional, la participación popular, etc.

2.—La puesta en evidencia del carácter necesariamente hiperconcentrador de la riqueza y de la distribución de los frutos del crecimiento económico en una minoría privilegiada; es decir, el carácter “excluyente” del estilo de crecimiento desarrollista.

3.—La incapacidad del orden vigente para conciliar “liberalismo económico” y “liberalismo político”; es decir, su carácter conflictivo en términos sociales y políticos que exige la limitación de las libertades públicas o la manipulación populista de la población, como formas de evitar —siempre en forma precaria— la protesta de las mayorías.

4.—Su carácter “imitativo” y su alienación a los patrones culturales, tecnológicos y de consumo de los centros capitalistas desarrollados.

5.—La subordinación de nuestra vida económica, social y política a los intereses de la estabilidad y continuidad del proceso de acumulación de capital a escala mundial que ha conducido siempre, por una parte, a la concentración privilegiada del poder económico en los centros domi-

nantes del sistema y, por otra, a la consiguiente limitación de la autonomía de nuestros países para orientar su desarrollo por caminos diferentes a los planteados por la dialéctica de la relación centro-periferia.

6.—El creciente desequilibrio entre el orden socio-económico, por un lado, y el orden natural, por el otro, como característica general del modo de producción capitalista, pero que llega a situaciones extremadamente peligrosas en el capitalismo periférico.

Esas críticas y aún las primeras propuestas alternativas al *status* actual han sido formuladas mucho antes de la presente gran depresión y de sus efectos desestabilizadores sobre las economías del Tercer Mundo. Sin embargo, las últimas versiones parten de la situación de crisis y, en consecuencia, se persigue que las estrategias cumplan un doble objetivo: resolver la crisis y avanzar al mismo tiempo hacia formas de organización económica, social y política capaces de corregir las fallas enumeradas. Posición esta que comparto a plenitud.

Dichas propuestas estratégicas parten todas de la necesidad de transformaciones estructurales, pero se diferencian unas de otras en el grado de profundidad de las mismas. En un extremo, están las que apuntan hacia un cambio radical del sistema económico-social, erradicando el modo de producción capitalista y asumiendo como paradigma la alternativa socialista; en el otro, están las propuestas transformadoras más epidérmicas que limitan sus objetivos al logro garantizado de mínimos aceptables de consumo básico para toda la población, como la llamada *estrategia de superación de la pobreza crítica* que tuvo el apoyo —hasta que entró en contradicción con las posibilidades de nuestros países para hacer frente a las obligaciones de la deuda externa—, de instituciones capitalistas de la relevancia del Banco Mundial. La gama de variaciones entre esos dos extremos es relativamente amplia: “socialismo nuevo”, en oposición crítica al “socialismo real”; “socialismo liberal” (Prebisch); “estrategias de autoafirmación colectiva” (Oteiza y otros); “estrategia de las necesidades básicas” (Fundación Dag Hammarskjöld y otros). Estas son sólo las variantes más difundidas.

El límite real que separa a este conjunto de propuestas en dos grandes grupos antagónicos es el de la ruptura o no con el orden capitalista. Quienes sostienen la idea esencialista de que es imposible superar la condición periférica dentro del sistema capitalista parten de un tipo de análisis —“el desarrollo dentro del capitalismo es necesariamente desigual y combinado”— que considero muy difícil de rebatir en cuanto a su fundamentación teórica e histórica. El problema central de tal alternativa es su viabilidad histórica actual, debido a que exige un cierto grado de consenso social respecto a la aceptación del cambio, lo cual está bastante lejos de haber sido alcanzado en la región, con excepción de Nicaragua. A ello se refiere Jorge Graciarena en el siguiente párrafo:

“Por ahora las proposiciones más radicales apenas si constituyen ideas generales que para avanzar tendrían primero que ser ideológicamente adoptadas como un mito social, como ideas fuerza que para concretizarse deberían encarnarse y orientar a poderosas fuerzas sociales. Es sólo a partir de este momento, cuando son ideológicamente asumidas, que las ideas empiezan a tener respaldo de poder, el que luego tendrá que estructurarse en instituciones y en un nuevo sistema hegemónico. De otro modo estas ideas no pasan de ser meras proposiciones intelectuales, que como otras tantas propuestas utópicas carecen de posibilidad histórica mientras no sean socialmente acogidas y políticamente promovidas por fuerzas sociales que se tornen dominantes”.

Graciarena coloca en primer plano el importante problema de la necesidad de un mínimo de condiciones subjetivas como condición indispensable para la factibilidad de todo cambio revolucionario. En ese orden de ideas, la situación que viven actualmente la casi totalidad de los países de la región aparece como un obstáculo insalvable para la instrumentación de dicha alternativa. Pero eso no debe entenderse como una situación cerrada e inmodificable. Las dos primeras palabras del texto: —“por ahora”— dan cuenta de que su autor concibe la posibilidad de que la situación actual pueda evolucionar hasta la conformación de un nuevo cuadro de condiciones subjetivas dentro del cual la propuesta de cambio de sistema llegue a ser asumida como un “mito social” deseable y realizable.

Por mi parte, sin llegar a afirmar la plena certidumbre de un cambio de ese género en el corto o mediano plazo, estimo que tampoco puede negarse su posibilidad. Por supuesto, aquí el discurso debe evitar generalizaciones y hacerse más específico, pues cada caso nacional plantea un cuadro diferente de condiciones. Pero el hecho más concreto es que en situaciones de crisis prolongada como la que se vive, el sostenido agravamiento de las condiciones objetivas —desmejora de las condiciones de vida de la población; tendencia creciente a agravarse la contradicción capital-trabajo; dificultades para la sustitución del régimen de acumulación y fracaso de la estrategia de Reagan; eventualidad no descartable de un *crack*; contradicciones entre los grandes poderes mundiales, etc.— deja abierta la posibilidad de conformación de un nuevo cuadro de condiciones subjetivas que favorecen la concretización de las “ideas fuerza” que proponen el cambio de sistema como salida. Cruzarse de brazos, sin embargo, a la espera de tal eventualidad, lejos de ser una actitud transformadora constituye otro tipo de estrategia pasiva. Si lo que está planteado es intentar superar simultáneamente la crisis en curso y la transformación de nuestras sociedades en el sentido que exige el interés mayoritario, la estrategia más realista no es esperar que se den las

condiciones para un cambio de sistema, sino concentrar esfuerzos y ganar la conciencia popular para la idea de que la tarea inmediata es la lucha contra el carácter periférico de nuestra condición capitalista.

En otras palabras, se trata de colocar en primer plano la lucha permanente por la profundización de la democracia económica, social y política. Será el desarrollo de esa lucha la única posibilidad de ir conformando y ampliando el necesario consenso social para la progresiva transformación del orden vigente con el grado de profundidad que permita, en cada momento, el coetáneo proceso de intensificación de la participación popular y que las instituciones de la sociedad civil se vayan convirtiendo en un factor de importancia creciente dentro de la nueva estructura de poder. Como podrá comprenderse, se trata de centrar las luchas en torno al objetivo inmediato de un desarrollo capitalista más participativo donde la atención a los requerimientos del bienestar de las mayorías sea el principal factor de legitimación de la acción estatal.

Un planteamiento de esas dimensiones está sujeto a muchas objeciones. Comenzando por una que tiene indiscutible relevancia, aquella que sostiene que el alcance de las metas propuestas debe enfrentar obstáculos estructurales muy difíciles de superar dentro de una sociedad capitalista, ya que, por definición, el modo de producción que le sirve de base implica necesariamente una desigual distribución social de los resultados finales de la actividad económica entre capitalistas y trabajadores; lo cual no sólo constituye una importante limitación estructural en la democracia económica, sino que conforma las bases del considerable poder político de los grupos representativos de los intereses del capital que les permite limitar la profundización de la democracia social y política.

Comienzo por aceptar que en sus términos más generales dicho planteamiento es incuestionable. No obstante, cuando se pasa a considerar la realidad concreta de lo que hoy es el capitalismo no es posible obviar las diferencias que se establecen en la distribución del ingreso y en la participación popular en los distintos países regidos por dicho modo de producción. No existe ninguna duda en que los países de capitalismo periférico presentan un cuadro mucho más desfavorable para las masas populares que el de los países centrales del sistema y aún en éstos, es posible observar notorias diferencias entre países como Suecia, Noruega, Holanda, Francia, por ejemplo, donde el Estado asigna particular valor a formas de regulación dirigidas a garantizar niveles mínimos de seguridad social y participación colectiva, y otros donde estos objetivos son dejados al libre juego de las fuerzas económicas.

Son esas diferencias, precisamente, las que hacen viable, al menos desde el punto de vista formal, la acción inmediata por la conquista de sucesivas mejoras y ganar a las grandes mayorías para la lucha contra un capitalismo menos salvaje. Esa debe ser la meta permanente del proceso

de transformación, sin otros límites que los que quieran establecerle las propias fuerzas populares en cada momento de su desarrollo. Es esta la única vía que puede conducir, a través de la acumulación de experiencias vividas colectivamente, hacia el estado de conciencia social que haga emerger en un momento dado el ideal revolucionario. No como consigna impuesta por una élite intelectual iluminada, sino como poderosa "idea-fuerza" nutrida en la convicción y en el consenso popular. Sólo así será posible la construcción de un socialismo auténticamente democrático porque coloca al pueblo como sujeto central del proceso de transformación y a sus dirigentes como instrumentos de la misma, y no a la inversa.

En síntesis, sostengo que es necesario plantear como punto de partida una estrategia realista que compenetrada del cuadro actual de condiciones objetivas y subjetivas, apunte simultáneamente hacia las metas de superar la crisis y las lacras y limitaciones del capitalismo periférico, de modo tal que la profundización del proceso de transformación tenga como límite real el que le impongan en cada momento las decisiones concientes y soberanas de la mayoría.

Los problemas que deberá resolver un planteamiento de ese género son de muy variada índole. Trataré de enunciar los que considero más importantes:

1.—Aun cuando es posible —si se excluyen los casos de Cuba y Nicaragua que presentan marcadas diferencias con los demás países latinoamericanos— hacer señalamientos generales que pueden considerarse válidos para el conjunto, hay que dejar muy claro que cada país plantea sus propias especificidades económicas, sociales y políticas. De ahí que, en sentido estricto, el concepto de estrategia que intento exponer sólo tiene vigencia real para el ámbito estrictamente nacional.

2.—Considerado lo anterior, la estrategia debe tener un mínimo de racionalidad teórica, de coherencia operativa y de integralidad social, económica y política.

3.—Las exigencias de racionalidad, coherencia e integralidad no deben, sin embargo, ser sobreestimadas en relación al más importante requisito, que es la explícita consideración de la factibilidad de su instrumentación; problema que coloca en primer plano la puesta en evidencia de la específica coalición de fuerzas sociales que actuaría como promotora y realizadora del proyecto estratégico.

4.—Los anteriores planteamientos conducen a la necesidad de evitar excesivos detalles en la formulación de acciones específicas en los distintos sectores de la economía. Como punto de partida, debe limitarse a la formulación de objetivos generales e intermedios, así como de los instrumentos para alcanzarlos. Este aspecto es de particular importancia. En primer lugar, porque si en condiciones menos complejas que la actual, el futuro no puede ser visualizado sino en términos

muy simples y generales, en la situación de continuos cambios que plantea la superación de la crisis mundial es todavía más difícil hacer previsiones muy detalladas. Y en segundo lugar, porque mientras mayor es el grado de detalles de un planteamiento estratégico, mayores son también las posibilidades de controversias y menor, por lo tanto, su capacidad para agrupar a su alrededor una amplia coalición de fuerzas a su favor. En consecuencia, parece más conveniente que una vez aceptados los lineamientos generales de la estrategia por parte de los componentes de dicha coalición de fuerzas, las discusiones de detalles se resuelvan en el propio proceso de instrumentación.

5.—Una vez aclarado lo anteriormente expuesto puede pasarse a la definición de los objetivos centrales, esenciales, de la estrategia dentro de una línea de discernimiento que argumente las razones de su escogencia, demuestre la factibilidad económica de cada uno de ellos, y la coherencia formal y factual de dichos objetivos.

A manera de ejemplo presentaré las líneas generales de una estrategia de ese tipo para el caso venezolano. Comenzaré por enunciar el objetivo general de la estrategia como el logro progresivo y simultáneo de dos metas interrelacionadas: la superación de la crisis actual y la construcción programada de las bases económicas, sociales, tecnológicas y políticas de una nueva organización social capaz de lograr, en la medida de la dotación de recursos del país y a lo largo del período cubierto por el proceso de instrumentación estratégica, niveles razonables de satisfacción de las *necesidades básicas* de la población venezolana.

La fijación de ese objetivo general implica una clara toma de partido respecto a dos problemas claves en la definición del estilo de desarrollo que se propone. En primer lugar, se establece la prioridad del consumo colectivo sobre el consumo individual, en oposición al vigente estilo elitico y excluyente. Y en segundo lugar, en íntima relación con lo anterior, se establece como aspecto esencial de la estrategia la búsqueda de una distribución del ingreso que permita el acceso de toda la población, a niveles deseables de participación, en el reparto de los frutos de la actividad económica.

En cuanto a las necesidades sociales básicas se hace referencia a la alimentación, educación, vivienda, salud y recreación, así como también a la participación popular en el proceso de toma de decisiones acerca de la reestructuración social y económica. Este último aspecto define el carácter eminentemente democrático, es decir, participativo del estilo de vida y de desarrollo que es consustancial con la mencionada estrategia.

La factibilidad económica del cumplimiento del mencionado objetivo general y de sus aspectos específicos va a depender de manera decisiva de la readecuación de la estructura productiva

del país basada en decisiones de carácter socioeconómicas y tecnológicas dirigidas al mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales y a la plena incorporación de nuestra fuerza de trabajo al proceso productivo. Este último aspecto constituye el instrumento fundamental para conformar el tipo de distribución del ingreso que permita a toda la población satisfacer sus necesidades básicas como la meta prioritaria del proceso económico-social.

Esa readecuación de la estructura productiva se concretiza en un conjunto de acciones, tales como: 1.— el desarrollo de la agricultura y de los subsectores industriales y de servicios que generen la oferta de la producción, dirigida a la satisfacción de las necesidades básicas como primera prioridad; 2.— la formación programada de los cuadros técnicos requeridos para el desarrollo de dichos sectores prioritarios; y 3.— la reorganización de todos los servicios ligados a la producción y circulación de la producción básica, con la finalidad de reducir a mínimos técnicos aceptables la incidencia de los costos de transporte y mercadeo en el valor final de los correspondientes bienes y servicios de consumo prioritario.

Los lineamientos de estrategia esbozados no podrán ser cumplidos eficazmente sin un mínimo de planificación económica dirigida a garantizar el desarrollo armónico entre los sectores de crecimiento prioritario y el resto de la economía y a incorporar progresivamente a todos los sectores sociales al proceso de toma de decisiones. Esta planificación debe ser capaz de superar el tradicional anquilosamiento de los planes estáticos, permitiendo una mayor flexibilidad frente a los cambios que están planteando a cada momento las situaciones nacional e internacional, tanto en el orden económico como en el político y social.

Estimo necesario subrayar que en el primer año de gobierno la administración de Jaime Lusinchi presentó al país un proyecto de planificación —el VII Plan de la Nación— que representaba un promisor punto de partida para la puesta en marcha de una estrategia transformadora. Este proyecto fue desmantelado ante las presiones del gran capital agrupado en Fedecámaras, lo cual demuestra dos aspectos: primero, que existen fuerzas dentro del actual partido de gobierno que están ganadas para la idea general de un cambio de estilo de desarrollo; y segundo, que todavía los factores del poder económico tienen dentro del aparato del Estado un considerable poder para adversar cualquier intento de cambio de esa especie. Volveré sobre este asunto.

El siguiente aspecto a tratar es el que atañe a la necesidad de replantear nuestro modo de articulación al SCM para adecuarlo al cumplimiento de los fines perseguidos por la propuesta alternativa de desarrollo. Es preciso reconsiderar aquí nuestras perspectivas de comercio internacional a corto, mediano y largo plazo, a fin de lograr un equilibrio dinámico entre las exigencias de divisas y de adquisición de bienes de capital que plantee el nuevo estilo de desarrollo y la ampliación del grado de autonomía para la toma de decisiones que exija el interés nacional. Al respecto,

destaco la conveniencia de profundizar en el llamado diálogo Sur-Sur en busca de una creciente complementación económica con otros países del Tercer Mundo, en particular con América Latina.

Lo dicho hasta aquí no es más que un ligero esbozo de los objetivos generales de la estrategia de desarrollo alternativo que he venido proponiendo desde hace algunos años (*). Como se ve, no se trata de un cambio radical de sistema sino de una proposición que intenta superar la crisis actual reestructurando la economía venezolana, con el objetivo de lograr una mayor participación económica, social y política de sus grandes mayorías y una creciente autonomía de acción frente a la dinámica general del SCM y a la elevada capacidad de sus sectores dominantes para manipular nuestro futuro. En síntesis, lo que se persigue es enfrentar la crisis considerándola como punto de partida hacia el logro de formas menos elitescas y subalternas de la organización capitalista.

Cada vez que he presentado dichos planteamientos, bien sea en eventos académicos o de otro tipo, los comentarios y críticas suscitadas han colocado en un plano secundario el problema que yo había considerado central en la etapa de elaboración de la estrategia. Me refiero a la racionalidad y coherencia de las propuestas dirigidas a utilizar la capacidad real de la economía venezolana para producir los bienes y servicios necesarios para garantizarle a toda la población niveles adecuados de vida a partir de la potencialidad productiva de sus recursos humanos y naturales.

No obstante, las preguntas dominantes han sido otras y siempre las mismas: "¿Cree Ud. que los sectores internos de poder van a permitir que se promueva una redistribución del ingreso que va en contra de sus intereses? ¿Dónde están las fuerzas sociales capaces de enfrentar con éxito al poderoso bloque de poder que constituye la cerrada alianza entre los partidos del *status* y los grandes grupos económicos internos y externos?"

Tales preguntas colocan en primer plano el problema de la factibilidad política del estilo de desarrollo en discusión con argumentos similares a los planteados por Graciarena, al referirse a las estrategias más radicales que propugnan el cambio de sistema económico. La razón es muy sencilla: toda estrategia transformadora, cualquiera que sea la profundidad de los cambios estructurales propuestos, va a ocasionar, en mayor o menor grado, modificaciones en el cuadro general de la distribución de los resultados finales de la actividad productiva y de las posiciones de poder político y social de grupos e individuos. De allí que suscite reacciones adversas por parte de quienes

(*) Véase *"Lineamientos Generales para la Investigación sobre un Nuevo Modelo de Desarrollo"*. CENDES. 1981.

resulten o crean resultar lesionados en sus intereses; individuos y grupos que tratarán de utilizar sus establecidas posiciones de poder para oponerse al proyecto de cambio.

Si los sectores perjudicados son los dominantes dentro de la estructura del Estado, resulta obvio que la instrumentación de la correspondiente estrategia no será posible sin que ocurra, previa o simultáneamente, la necesaria transformación de la estructura de poder. En otras palabras, la puesta en marcha de cualquier estrategia transformadora exige un cierto grado de *desestructuración y reestructuración* de las bases de sustentación del Estado nacional para ponerlo al servicio de las fuerzas que apoyan las propuestas de cambio. Como lógica reacción, surgirán grupos opositores integrados por las fuerzas conservadoras del *status* previo. Es importante precisar que los mencionados movimientos de desestructuración y reestructuración de la estructura de poder no deben ser entendidos como “fases” diacrónicas, sino como aspectos sincrónicos de un mismo proceso complejo.

En el caso específico de la alternativa de desarrollo que se discute, los objetivos enunciados permiten dilucidar cuál es el tipo de desestructuración y reestructuración que exige su puesta en marcha. Resulta obvio que el objetivo central de lograr una progresiva redistribución del ingreso va en contra del gran capital (nacional o internacional) agrupado en Fedecámaras. También va en contra de aquellas fuerzas políticas del *status* que fundamentan una importante cuota de su poder en la alianza con dichos sectores económicos. Hay todavía un tercer adversario irreconciliable: los intereses del gran capital internacional, aliados a los dos primeros, y que tienen como objetivos específicos, en el orden estratégico, garantizar la transición desde el actual estilo de capitalismo periférico al que resulte de la ya referida reestructuración de la economía mundial y, en el orden táctico, cerrar toda vía de decisión autónoma diferente mediante las presiones a que da lugar nuestra condición de país deudor del sistema financiero internacional. Es aquí donde aparece el Fondo Monetario Internacional como instrumento operativo central de los intereses externos.

Esos son los sectores que en cerrada alianza arremeterían contra cualquier estrategia transformadora no sólo en Venezuela sino en toda América Latina. Esto plantea, entonces, una interrogante: ¿Es posible oponer a tan poderosa coalición otro conjunto de fuerzas con el suficiente poder para llevar hacia adelante un tipo de estrategia como la que se propone? La opinión más generalizada responde negativamente apoyándose en la elevada cuota de poder que hoy detentan dichas fuerzas y en la solidez de los intereses comunes que los agrupa en un bloque virtualmente indivisible. Pienso, en cambio, que tal punto de vista es menos sólido de lo que parece, porque las condiciones económicas, sociales y políticas en las cuales se ha sustentado el poder de dichas fuerzas han cambiado y están cambiando como consecuencia de la crisis. Trataré de aclarar mejor esta afirmación.

Comenzaré por señalar que el factor fundamental de la actual estructura de poder no son los grupos económicos, sino los partidos políticos del *status*, los que se han turnado en el ejercicio del gobierno durante los últimos 28 años. En efecto, durante ese lapso, la indiscutible capacidad de Fedecámaras para imponer o vetar políticas al sector público ha sido aceptada tácitamente por esos partidos como condición de legitimación de la modalidad democrático-representativa de Estado capitalista periférico que ha vivido Venezuela desde 1958. Modalidad que tiene como base de fundamentación política la asignación de una elevada cuota de poder a los partidos. Así se ha cumplido, de modo simultáneo, la legitimación del Estado y la legitimación del poder de los partidos dentro del mismo. Pero además, la alianza entre las fuerzas económicas y las fuerzas políticas más relevantes ha legitimado, al mismo tiempo, la posición del Estado frente a los grandes poderes del capitalismo internacional.

La legitimación frente a las élites no fue todavía suficiente fundamento para la estabilidad del orden establecido. Ha sido necesario garantizar también el consenso de las grandes mayorías nacionales o de una parte importante de ellas, no sólo para evitar o reducir al mínimo los enfrentamientos de clase, sino porque esas grandes mayorías a través del voto directo y secreto han refrendado cada cinco años la legalidad del *status*. El instrumento utilizado para tal finalidad ha sido el dominio partidista de las principales organizaciones populares, tomando como punto de apoyo el considerable poder económico que asigna al Estado venezolano su condición de receptor del cuantioso ingreso petrolero que lo ha constituido en el principal empleador del país, en gestor de la prestación de servicios sociales básicos para la población más necesitada, en dispensador de subsidios y prebendas de las más variadas índoles, legales e ilegales, además de prestarse para las innumerables formas de corrupción administrativa como vía de movilización social vertical.

Por lo demás, existe otra poderosa razón paliativa de los potenciales conflictos entre el capital y el trabajo derivado también de nuestra condición de país petrolero. En efecto, mientras en los países no petroleros de América Latina dicha contradicción se centra en la distribución de un ingreso nacional generado por ambos factores —trabajo y capital—, de tal manera que, en un juego que suma cero, cualquier aumento en la participación de uno de ellos significa la reducción de la del otro, contradicción que sirve de base al carácter conflictivo del capitalismo periférico; en Venezuela, en cambio, el Estado podía dar a uno y a otro sin restarle a ninguno de ellos. Por eso he afirmado repetidas veces y desde hace mucho tiempo, que la paz y estabilidad social que ha gozado Venezuela han sido una paz y una estabilidad petrolera.

Sobre ese soporte, los partidos políticos del *status* han podido ofrecer al bloque dominante de poder no sólo el alto grado de legitimidad formal que le aportan sus cuantiosos caudales elec-

torales, sino además su indiscutible capacidad real para silenciar la voz del pueblo con el “democrático” expediente de hablar en su nombre.

Pero la crisis que hoy vive el país ha comenzado a minar las bases de sustentación del idílico matrimonio entre fuerzas políticas y fuerzas económicas de la coalición de poder. Por una parte, se empieza a agravar la contradicción capital-trabajo, pues comienza a disminuir el tamaño del pastel a repartir; y por la otra, los nuevos niveles de ingreso petrolero son cada vez más insuficientes para permitirle a los partidos de gobierno seguir jugando a la cuerda floja de la legitimación simultánea y sin temores hacia el capital y el trabajo.

De hecho, a medida que se ha ido agravando la crisis se reducen las posibilidades de acumulación interna del gran capital, el cual comienza a sentir cada vez menos satisfacción con el orden establecido. Tanto es así, que la primera reacción fue la cuantiosa exportación de capitales —que se mantiene hasta hoy, puesto que no se avisa ningún síntoma de repatriación de los mismos—, lo cual expresa su pérdida de confianza sobre el futuro de la economía venezolana. Y dicho sea de paso, esa reacción expresa las endeble bases en que hoy se sustenta la alianza entre las fuerzas económicas y las fuerzas políticas del *status*. La segunda reacción, por parte del gran capital, ha sido tratar de sacar el mayor partido posible de la situación económica interna, promoviendo acciones y propugnando políticas que están haciendo recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de trabajadores y consumidores. Entre ellas, alza de los precios, pago subsidiado de la deuda externa, contención institucional y legal de los salarios, especulación con divisas, todo lo cual está conduciendo a un progresivo agravamiento de la contradicción capital-trabajo.

Tales comportamientos del gran capital, en condiciones de renta petrolera decreciente, contribuyen poderosamente a debilitar la posición de las fuerzas políticas del bloque en el poder, ya que reducen la capacidad del Estado para enfrentar la crisis económica y corrompen o debilitan las posibilidades que pudiera tener el partido de gobierno en la próxima contienda electoral, todo lo cual coloca a este último frente al dilema de mantener prioritariamente su alianza con los grandes grupos económicos —legitimación por la derecha— o tener que enfrentar a dichos grupos instrumentando una estrategia dirigida a colocar en primer plano el interés mayoritario. En esta última salida radican —al menos por ahora— las esperanzas de factibilidad de una estrategia como la que propongo a partir del cuadro de fuerzas que hoy domina la vida política del país.

Reconozco que no es fácil el camino a recorrer, sobre todo porque implica una profunda reestructuración de dichas fuerzas centrada en los sectores internos de Acción Democrática que diseñaron y avalaron el VII Plan de la Nación, pero apoyada en los partidos políticos progresistas o las fracciones más nacionalistas de los mismos; en el movimiento obrero y campesino organiza-

do, o por organizar, los trabajadores sindicalizados que son una minoría en el país; en la amplia masa laboral del llamado sector informal que ocupa el 40 por ciento de la población activa ocupada; en los estudiantes; en los profesionales y técnicos independientes; en las asociaciones de vecinos y otros movimientos municipales y locales; en los pequeños y medianos productores y aún en los grandes empresarios que coloquen el futuro del país, que es el suyo propio, por encima de mezquinos intereses de corto plazo.

Decía que construir tal coalición no es un camino fácil ni exento de traumas. Pero creo también que mucho más difícil y mucho más traumática sería la ruta que tendríamos que transitar hacia el siglo XXI si se mantiene el rumbo que hoy seguimos, pues la acumulación de conflictos que se está generando puede llegar al punto crítico del estallido, dando lugar a un nuevo cuadro de condiciones subjetivas que desemboquen en otro tipo de situación dilemática; o dictadura de derecha o cambio radical. Dilema que en las condiciones previsibles a mediano plazo, en el orden mundial, plantearía el futuro de la sociedad venezolana en términos de la más extrema conflictividad.

Para concluir, quiero dejar bien claro mi posición sobre esos posibles desarrollos. Estoy decididamente del lado del interés económico, social y político de las grandes mayorías populares de Venezuela, de América Latina y de todo el mundo. Esa toma de partido me ha llevado a elegir a la sociedad socialista como la meta final de las expectativas de desarrollo de la humanidad. Pienso que el camino más conveniente para ella es la construcción de un socialismo participativo, a través de un proceso de luchas dentro del orden actual que vaya generando la necesaria toma de conciencia colectiva para que, en el límite de esas luchas, el salto hacia el cambio de sistema sea una decisión ampliamente mayoritaria; es decir, una opción sustentada en el ejercicio más profundo de la democracia. En todo caso, si la historia demostrara la inviabilidad de ese camino, quedaría todavía la posibilidad de tomar partido por cualquier otra forma más comprometida con la lucha a que obliguen las fuerzas empeñadas en mantener los aspectos esenciales del orden vigente. Sólo que en esas circunstancias éstas deben aceptar todas las responsabilidades a que conduzca dicho desarrollo.